

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOU FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



Bogotá D.C. 16 de febrero de 2026

Honorable Juez  
JAIRO HERNANDO RAMIREZ GIRALDO  
**JUZGADO PROMISCOU DE FAMILIA DEL CIRCUITO TURBO**  
[jprfturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jprfturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Turbo- Antioquia

<b>ASUNTO:</b>	IMPUGNACIÓN FALLO DE TUTELA DEL 9 DE FEBRERO DE 2026
<b>RADICADO:</b>	058373184001 <b>2025 00442</b> 00
<b>ACCIONANTE:</b>	RAFAEL CUESTA PALACIOS
<b>ACCIONADOS:</b>	PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A., MINISTERIO DEL INTERIOR- DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA.
<b>VINCULADOS:</b>	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ (CORPOURABÁ), AGENCIA NACIONAL DEL LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA), AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), ALCALDÍA DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA.

Respetado Señor Juez,

El suscrito identificado como aparece al pie de mi antefirma, en mi condición de director jurídico del Ministerio del Interior, de conformidad con la resolución No.1289 del 02 de septiembre de 2025[1] y Acta de Posesión del día 11 del mismo mes y año, en ejercicio de las funciones de representación judicial y extrajudicial del Ministerio, de acuerdo con lo señalado en el decreto 714 de 2024[2], de manera atenta y en aplicación de la **Ley 2213 de 2022 y del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 en cuanto a notificación por medios electrónicos se refiere, encontrándome dentro del término oportuno mediante el presente escrito se presenta impugnación de fallo de tutela del 9 de febrero de 2026 proferida por su despacho dentro del proceso de la referencia**, conforme a la información y documentación aportada, por la **Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a cargo de su Director Pedro Pablo Salas Hernández**, en su calidad de área funcional competente para este caso, en los siguientes términos:

## **I. ANTECEDENTES PROCESALES**

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOUO FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



1.1. En fecha 18 de noviembre de 2025, su Honorable Despacho admitió acción de tutela presentada por el señor RAFAEL CUESTA PALACIOS, en calidad de Representante Legal del Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato (COCOMAUNGUIA) en contra de Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. y Ministerio del Interior- Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con el objeto de que se protejan los derechos fundamentales de las comunidades afrodescendientes del sector del Río Atrato y la Bahía del Golfo de Urabá, a la Consulta Previa, Libre e Informada, Identidad Cultural y Étnica, Participación, Debido Proceso Administrativo, Igualdad y No Discriminación. Lo anterior, en ocasión de la ejecución del proyecto "Construcción y Operación de un Terminal Portuario Multipropósito en el Municipio de Turbo, departamento de Antioquia" denominado PUERTO ANTIOQUIA, respecto del cual manifiesta, no se ha desarrollado el respectivo proceso de consulta previa con la comunidad que representa, dicha acción de tutela fue debidamente notificada a esta cartera ministerial.

En respuesta a la acción de tutela referida, el Ministerio del Interior - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, remitió ante su despacho informe de contestación a acción de tutela, a través del **Oficio con radicado 2025-2-002400.053181 Id 655478 del 21 de noviembre de 2025** (Anexo 3).

1.2. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Turbo – Antioquia, procedió a estudiar la acción de tutela promovida el señor RAFAEL CUESTA PALACIOS en calidad de Representante Legal del Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato (COCOMAUNGUIA), y el 28 de noviembre de 2025 profirió sentencia de primera instancia No. 226 (Anexo 4) resolviendo lo siguiente:

*"PRIMERO. CONDECER el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, identidad cultural y étnica, derecho de participación, debido proceso, igualdad y no discriminación, invocadas por RAFAEL CUESTA PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.901.134, actuando en calidad de Representante Legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO (COCOMAUNGUIA).*

*SEGUNDO. ORDENAR al Ministerio del Interior a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa que, en el marco de sus*

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOU FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



*competencias constitucionales y legales, en un término no mayor cuarenta y ocho (48) horas, adelante el análisis de determinación de procedencia de la consulta previa, conforme al procedimiento reglado previsto en el Decreto 2353 de 2019, la Directiva Presidencial No. 08 de 2020 y la jurisprudencia constitucional vigente, con base en la información técnica que deberá ser suministrada por el ejecutor del proyecto, en los términos exigidos por la normatividad vigente y de ser procedente convoque al Consejo Comunitario Accionante a adelantar el proceso de consulta previa, en relación al proyecto Puerto Antioquia. Lo anterior respetando los principios que rigen la consulta previa. (...)"*

Una vez notificada formalmente la mencionada sentencia, esta Dirección procedió a remitir, de manera inmediata, a la Subdirección Técnica de Consulta Previa, área encargada de Determinar la Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la ejecución de proyectos, obras o actividades y para la implementación de medidas administrativas y legislativas, a efectos de activar sin dilación dicho análisis, atendiendo el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas impartido por el despacho judicial para dar inicio al cumplimiento de la orden.

Esta actuación inicial permitió la puesta en marcha de una serie de acciones técnicas, administrativas y de coordinación interinstitucional que constituyen el punto de partida para la ejecución progresiva de la orden judicial, de conformidad con la naturaleza compleja del procedimiento de consulta previa regulado por el Decreto 2353 de 2019, lo cual fue informado a su despacho mediante, informe de cumplimiento de la sentencia N. 226 del 28 de noviembre de 2025, notificando el **Oficio radicado 2025-2-002400-060157 Id 677737 del 18 de diciembre de 2025** (Anexo 5).

1.3. El 27 de enero del 2026, en sede de impugnación y dentro del proceso de la referencia, el Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil – Familia, resolvió lo siguiente;

*"PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de lo procesado desde del auto que admitió a trámite esta acción de tutela; y, de consiguiente, DEVOLVER el plenario al juzgado de origen para que recomponga la actuación con la debida notificación de todas las entidades vinculadas en esa misma providencia.*

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOUO FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



*SEGUNDO: COMUNÍQUESE esta determinación a las partes por cualquier medio expedito que asegure su conocimiento. (...)”*

1.4. El 28 de enero de 2026, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbo, Antioquia, profirió el Auto Interlocutorio N° 051, atendiendo la orden del Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil – Familia en sede de impugnación que consistió en DECRETAR LA NULIDAD de lo procesado desde del auto que admitió a trámite esta acción de tutela, y en ese sentido, su honorable despacho dispuso lo siguiente;

*"PRIMERO. ADMITIR la presente acción de tutela instaurada por RAFAEL CUESTA PALACIOS en contra de la PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABA S.A. y MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA y se ordena vincular a CORPOURABÁ, AGENCIA NACIONAL DEL LICENCIAS AMBIENTALES, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DISTRITO DE TURBO ANTIOQUIA por la probable violación al derecho cuya protección deprecia.*

*SEGUNDO. NOTIFICAR, en debida forma y por el medio más expedito, a las partes la admisión de esta acción, con entrega a las accionadas y vinculadas de copia de la misma, para que en el término de DOS (02) DÍAS, siguientes al de su notificación, ejerzan el derecho de defensa que les asiste.*

*TERCERO. DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: Tener en su valor probatorio los documentos aportados con la acción constitucional. (...)”*

En respuesta a la acción de tutela referida, el Ministerio del Interior - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, remitió ante su despacho informe de contestación a acción de tutela, a través del **Oficio radicado 2026-2-001404-002258 Id 700598 del 03 de febrero de 2026** (Anexo 6).

1.5. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbo, Antioquia, mediante providencia de primera instancia del 9 de febrero de 2026, Rad. 05837318400120250044200, dispuso lo siguiente:

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCO FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



*"PRIMERO. CONDECER el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, identidad cultural y étnica, derecho de participación, debido proceso, igualdad y no discriminación, invocadas por RAFAEL CUESTA PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.901.134, actuando en calidad de Representante Legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO (COCOMAUNGUA).*

*SEGUNDO. ORDENAR al Ministerio del Interior a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, en un término no mayor cuarenta y ocho (48) horas, convoque al Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato a través de su representante legal, a adelantar el proceso de consulta previa, en relación al proyecto de "Construcción y Operación de un Terminal Portuario Multipropósito, en el Municipio de Turbo Antioquia – Puerto Antioquia". Lo anterior respetando los principios que rigen la consulta previa.*

*TERCERO. ORDENAR al Ministerio del Interior que a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que, en el marco del cumplimiento del numeral anterior: (i) determine los impactos ambientales, culturales, económicos y sociales que el proyecto "Puerto Antioquia" ha ocasionado sobre el colectivo étnico, asegurándose que de existir los mismos, sean mitigados por Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. en el tiempo que resta para la finalización total del proyecto (ii) crear mecanismos que garanticen el dialogo permanente con el Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato (COCOMAUNGUA) mientras el proceso se encuentra en ejecución (iii) incitar a la aplicación rigurosa de la metodología definida por el Min Interior - DANCP para el estudio de procedencia; y (iv) de ser procedente proponga e implemente las medidas requeridas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar y/o reparar los impactos ya generados a la comunidad en razón del desarrollo del proyecto.*

*CUARTO. NO ACCEDER a las demás pretensiones del accionante, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*

*QUINTO. Se ordena DESVINCULAR de esta acción a las entidades Corpourabá, Agencia Nacional del Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Infraestructura y Distrito de Turbo Antioquia.*



*SEXTO. NOTIFICAR por cualquier medio efectivo a los interesados en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.*

*SÉPTIMO. ADVERTIR a las partes que este fallo puede ser impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.*

*OCTAVO. REMITIR de no ser impugnada la presente decisión judicial a la Corte Constitucional esta providencia una vez ejecutoriada, para su eventual revisión, según lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE."*

En atención a lo expuesto, el Ministerio del Interior - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DCP), procede a presentar escrito de impugnación de la providencia del 9 de febrero de 2026 Rad. 05837318400120250044200, proferida por su honorable despacho de acuerdo a lo siguiente:

## **II. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 86, inciso segundo, de la Constitución Política[3], así como en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991[4], los cuales establecen que el fallo de tutela proferido en primera instancia es susceptible de impugnación, y que, para tal efecto, el artículo 31 en mención prevé un término de tres días contados a partir de su notificación para interponer la impugnación, término que de conformidad con lo señalado en el **inciso 3° del artículo 8° de la Ley 2213 de 2022** solo empieza a contarse una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico de notificación, se procede a sustentar el recurso de impugnación interpuesto contra el fallo de tutela dictado en el presente asunto, en los siguientes términos:

### **2.1. Del criterio de afectación directa y el desconocimiento del precedente judicial en materia de Consulta Previa.**

El fallo impugnado incurre en un desconocimiento sustancial del marco procedimental y competencial que regula la consulta previa en Colombia, al ordenar en el **numeral segundo** del fallo de tutela del 9 de febrero de 2026 al Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa **"en un término no mayor cuarenta y ocho (48) horas, convoque al Consejo**





**Comunitario Mayor del Bajo Atrato a través de su representante legal, a adelantar el proceso de consulta previa, en relación al proyecto de "Construcción y Operación de un Terminal Portuario Multipropósito, en el Municipio de Turbo Antioquia – Puerto Antioquia", sin que previamente se haya surtido, de manera regular, la etapa de Determinación de la Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa prevista en el Decreto 2353 de 2019[5].** Dicha etapa no es una formalidad prescindible, sino el presupuesto técnico-jurídico indispensable para establecer con precisión, si el proyecto objeto aquí de debate, tiene o no la capacidad de afectar directamente al Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato.

En el **numeral tercero** del mismo fallo de tutela, ordeno a esta Dirección que, **"en el marco del cumplimiento del numeral anterior: (i) determine los impactos ambientales, culturales, económicos y sociales que el proyecto "Puerto Antioquia" ha ocasionado sobre el colectivo étnico, asegurándose que de existir los mismos, sean mitigados por Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. en el tiempo que resta para la finalización total del proyecto (ii) crear mecanismos que garanticen el dialogo permanente con el Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato (COCOMAUNGUIA) mientras el proceso se encuentra en ejecución (iii) incitar a la aplicación rigurosa de la metodología definida por el Min Interior - DANCP para el estudio de procedencia; y (iv) de ser procedente proponga e implemente las medidas requeridas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar y/o reparar los impactos ya generados a la comunidad en razón del desarrollo del proyecto"**, sin tener en cuenta que, la competencia asignada por la Constitución y la Ley a esta Dirección, es la de, Determinar la Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa de acuerdo al criterio de afectación directa, y de ser procedente, liderar, coordinar y dirigir el proceso de consulta previa.

En ese sentido, esta Dirección del Ministerio del Interior, no tiene la facultad ni la competencia legal ni constitucional, para determinar impactos ambientales, ni culturales, económicos y sociales, se reitera, nuestra competencia única y exclusivamente es la de Determinar la Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa de acuerdo al criterio de afectación directa, y en el caso que proceda la Consulta Previa, es en este proceso que se determinan los impactos y medidas de manejo, y de qué manera se puede corregir, mitigar y compensar las posibles afectaciones directas que se puedan causar a un colectivo étnico, que finalmente queda establecido por medio de acuerdos entre la comunidad y el ejecutor del



proyecto. En estos acuerdos es donde quedan reflejadas **las medidas requeridas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar y/o reparar los impactos que se puedan causar a una comunidad étnica en razón del desarrollo de un proyecto, obra o actividad.**

Así las cosas, se hace necesario describir las competencias de esta Dirección, que versan única y exclusivamente sobre el derecho fundamental a la consulta previa, el cual consta de unas etapas, siendo un requisito sine qua non, culminar una etapa a la vez, para poder avanzar a la siguiente.

En el marco de las competencias que le fueron asignadas a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante el **Decreto 2353 de 2019**<sup>[6]</sup>, se modificó la estructura del Ministerio del Interior y se creó esta Dirección, convirtiéndola en garante dentro del desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión, entre otras competencias, de I) **determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa** para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran y II) **liderar, dirigir y coordinar los procesos de consulta previa**, siendo así, la única entidad a nivel Nacional, facultada para determinar si se hace o no un proceso consultivo con comunidades étnicas y además es quien adelanta procesos de consulta previa en Colombia.

Lo primero es que, el Decreto Ley 2893 de agosto de 2011<sup>[7]</sup> creó dentro de la estructura del Ministerio del Interior, la anterior Dirección de Consulta Previa (hoy Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa), convirtiéndola en garante dentro del desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de atender entre otras tareas, la de certificar la presencia o no de grupos étnicos en el área donde se pretenda ejecutar un proyecto, obra o actividad (POA).

Que dicho decreto tenía establecida la competencia de esa Dirección así:

"Artículo 16. Funciones de la Dirección de Consulta Previa. Son funciones de la Dirección de Consulta Previa las siguientes:

"(...) 5. Expedir certificaciones desde el punto de vista cartográfico, geográfico o espacial, acerca de la presencia de grupos étnicos en áreas





*donde se pretenda desarrollar proyectos, obras o actividades que tengan influencia directa sobre estos grupos. (...)”*

Con la finalidad de reglamentar las competencias descritas, la directiva presidencial 10 de 2013[8], que contiene la guía para la realización de la consulta previa con las comunidades étnicas, determinó que el objeto de la etapa de certificación consiste en:

*“(...) Determinar si para un proyecto, obra o actividad se certifica o no presencia de una comunidad étnica según los criterios del Convenio 169 de la OIT, la legislación nacional y la jurisprudencia constitucional sobre comunidades étnicas. (...)”*

Posteriormente, la honorable Corte Constitucional en la sentencia SU-123 del 15 de noviembre de 2018 [9], resolvió en su orden sexta:

*“(...) Exhortar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que, con base en los lineamientos expuestos en esta sentencia: adopten las medidas pertinentes para regular lo relacionado con los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas, que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, en los términos del Convenio 169 de la OIT; así mismo se realicen los ajustes para que la institución encargada de otorgar los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas cuente con autonomía e independencia administrativa y financiera, necesarias para ejercer adecuadamente su función. (...)”*

De acuerdo a los lineamientos impartidos por la Corte Constitucional, se creó el Decreto 2353 de 2019[10], donde se suprimió la función de certificación de presencia o no de comunidades étnicas para un proyecto, obra o actividad (competencia que estaba en cabeza de la antigua Dirección de Consulta Previa), replazándola por la de Determinar la Procedencia o no de la Consulta Previa con comunidades étnicas, de acuerdo al criterio de afectación directa.

En ese sentido, la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en ejercicio de sus funciones y competencias, determina a través de acto administrativo debidamente motivado la procedencia y oportunidad de la Consulta Previa. Por su parte, la Subdirección de Gestión de Consulta Previa, se encuentra facultada para liderar, dirigir y coordinar el desarrollo de los procesos consultivos.



Resulta pertinente precisar que, en general, para cualquier Proyecto, Obra, Actividad o Medida Administrativa para el cual se haya identificado la necesidad de adelantar Consulta Previa, bajo los parámetros establecidos en la Directiva Presidencial Número 10 de 2013[11], modificada por la Directiva Presidencial Número 8 de 2020[12], el proceso de Consulta Previa consta de cinco etapas a saber:

**"(...) ETAPA 1 – Determinación de procedencia de la consulta Previa** (Anteriormente certificación de presencia de comunidades étnicas): En esta etapa desde la Subdirección Técnica de la DCP se determina si la implementación de un proyecto, obra, actividad (POA) o medida administrativa requiere la realización de la consulta previa de acuerdo con el criterio de afectación directa y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran. Una vez consolidada toda la información señalada previamente, la Subdirección Técnica determina si para el proyecto, obra o actividad o medida administrativa procede o no la consulta previa, lo cual se recoge en un acto administrativo. En el caso de proceder la consulta previa el ejecutor deberá solicitar el inicio del proceso consultivo ante la Subdirección de Gestión de la DCP.

**ETAPA 2 – Coordinación y preparación:** En esta etapa, luego de haber recibido la solicitud de inicio respectiva por parte del ejecutor, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DCP), a través de la Subdirección de Gestión, convoca al ejecutor a una reunión con el objeto de realizar el alistamiento de lo necesario para avanzar en las siguientes etapas del proceso de consulta previa. En esta etapa, en la cual participa la DCP y el ejecutor del proyecto, obra, actividad o medida administrativa, la DCP resuelve inquietudes frente a las etapas del proceso de consulta previa, luego el ejecutor expone la presentación que se realizará a las comunidades con la información frente a la medida a consultar y la propuesta de ruta metodológica que se pondrá a consideración de las comunidades étnicas en la etapa de Preconsulta. Esta propuesta de ruta metodológica consiste en el cronograma de reuniones y actividades que se propondrá a las comunidades étnicas para el desarrollo del proceso consultivo.

**ETAPA 3 – Preconsulta:** En esta etapa el ejecutor deberá realizar una concertación con las autoridades representativas de las comunidades étnicas para definir la ruta metodológica a seguirse para el desarrollo de la etapa de consulta previa. En la etapa de Preconsulta participan las comunidades étnicas, el ejecutor y la DCP, además se convoca al Ministerio Público y a otras entidades según se requiera, como garantes del espacio y de los derechos de las comunidades



*étnicas. En este espacio desde la DCP se realiza una presentación de los aspectos generales y etapas del proceso de Consulta Previa y se resuelven las dudas que las comunidades étnicas tengan al respecto, luego se da el paso para que el ejecutor realice la presentación con la información del proyecto, obra, actividad o medida administrativa que se consultará y resuelva las dudas que se den por parte de las comunidades étnicas.*

*Después de brindar la información sobre la medida a consultar, el ejecutor pone a consideración de las comunidades étnicas la propuesta de ruta metodológica, la cual deberá ser concertada con las comunidades étnicas en un ejercicio de intercambio de opiniones y retroalimentación de observaciones, hasta su aprobación por las partes. La ruta metodológica deberá señalar las fechas y lugares de las reuniones de consulta previa y demás actividades requeridas para el desarrollo del proceso consultivo en lo que respecta a las tres fases de la etapa de consulta previa, el tiempo de duración de la consulta, así como los aspectos logísticos. Acordada la ruta metodológica se procede a dar apertura formal al proceso de consulta Previa.*

**ETAPA 4 - Consulta previa:** *En esta etapa, y bajo la coordinación de la DCP, se adelanta un diálogo intercultural entre el ejecutor del proyecto, obra, actividad (POA) o medida administrativa y las comunidades étnicas, en el cual las comunidades étnicas tendrán participación real, oportuna y efectiva sobre la identificación de las medidas de manejo encaminadas a prevenir, corregir, mitigar o compensar los posibles impactos negativos o positivos derivados de la implementación del POA o medida administrativa susceptible de afectar directamente a dichas comunidades, con el fin de proteger su identidad étnica y cultural.*

*Esta etapa consta de tres fases para su desarrollo, la primera fase es el análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, la segunda fase es la formulación de acuerdos, los cuales se derivan de las medidas de manejo identificadas, y la tercera fase es la protocolización de dichos acuerdos, los cuales son obligación para las partes que los suscriben (Ejecutor-Comunidad Étnica). En la fase de protocolización se define entre las partes la conformación del comité de seguimiento a los acuerdos protocolizados.*

*Los acuerdos protocolizados deben ser claros, medibles, tener un plazo definido, y unos indicadores que permitan constatar su avance y contar con responsables de su cumplimiento, lo cual facilitará el desarrollo de la etapa de seguimiento y el posterior cierre del proceso de consulta previa.*

**ETAPA 5 - Seguimiento de acuerdos:** *En esta etapa se adelantan los espacios necesarios para que las partes, a través del comité de seguimiento, adelanten la verificación del cumplimiento de los acuerdos protocolizados, bajo la coordinación*



*de la DCP, facilitando el diálogo intercultural entre ejecutor y comunidades étnicas para que las mismas argumenten, expongan y soporten los avances frente al cumplimiento de lo acordado. (...)”*

Al respecto, de la Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa, es importante señalar que la Honorable Corte Constitucional mediante la sentencia SU 123 de 2018[13], definió la Afectación Directa como el principal criterio para determinar la procedencia de la consulta previa, en este orden de ideas, el alto tribunal constitucional, consideró sobre la misma lo siguiente:

*“(...) Es un concepto jurídico indeterminado que hace referencia al impacto positivo o negativo que tiene una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. En el caso concreto de la afectación directa por proyectos de exploración y explotación de recursos no renovable incluye: (i) el impacto en el territorio de la comunidad tradicional; o (ii) el impacto en el ambiente, la salud o la estructura social, económica, así como cultural del grupo. (...)”*

De igual manera, la Honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-123 de 2018[14], considero que **existe afectación directa cuando:**

*“(...) (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.(...)”*

Es así como, el acto administrativo de determinación de la procedencia de la consulta previa lo que busca es **establecer una posible afectación directa** a las comunidades étnicas. Dicho acto administrativo, se expide a petición de parte



del ejecutor del proyecto, obra o actividad o medida administrativa o legislativa y éste lo solicita según las condiciones o circunstancias de tiempo en que lo requiera. Sin embargo, se reitera, debe radicarse la solicitud previa a la ejecución del proyecto.

De conformidad con lo anterior, es claro que la consulta previa tiene un requisito sine qua non, sobre el cual, **no puede ordenarse un proceso consultivo** si el mismo no es identificado en debida forma, el cual corresponde **a la afectación directa**.

Así las cosas, es claro que la Corte Constitucional ha sujetado el ejercicio del derecho a la consulta previa, a la existencia de una afectación directa a una comunidad étnica por la ejecución de un proyecto, obra o actividad, dado que este derecho fundamental no es un mecanismo simple de participación, sino que necesita la existencia de ciertos elementos definitorios para poder ser ordenada.

Requisitos definitorios, que no fueron analizados por el juzgado de primera instancia, debido a que dentro del análisis que este realiza, únicamente se limita a motivar su decisión en presunciones subjetivas y consideraciones sin ningún tipo de sustento probatorio o técnico, toda vez que el funcionario a-quo, se adentra en campos que no son de su experticia y conceptúa como lo hizo y se señala a continuación:

*"(...) Partiendo de las apreciaciones jurisprudenciales y el estudio del libelo introductorio y de las respuestas dadas por los accionados se hace evidente que se han identificado impactos negativos que afectan a las comunidades aledañas al proyecto, lo que lleva a que se ordenara por la ANLA la emisión de ordenes dirigidas a PUERTO ANTIOQUIA en el sentido de que se debe identificar la existencia de comunidades raizales que hacen presencia en el área de influencia del proyecto, y que consecuencia de ello se debe proceder a hacer las consultas previas que ordena la ley... (página 29 de la sentencia del 9 de febrero de 2026)*

*"(...) El representante del consejo comunitario accionante argumenta que no ha sido tomada en cuenta su existencia ni las afectaciones reales que este proyecto trae a su comunidad, y es así como para el despacho el derecho fundamental a la consulta previa frente a proyectos implica el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos, así como la necesidad de propiciar un diálogo intercultural para obtener su consentimiento sobre medidas que los afecten directamente. Por ello*

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOU FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



*considera que la consulta previa se activa cuando existen medidas legislativas, administrativas o proyectos susceptibles de afectar directamente a estos pueblos, siendo clave la noción de afectación directa... (página 30 de la sentencia del 9 de febrero de 2026)*

*"(...) Para el caso de megaproyectos como el que hoy nos ocupa la Corte ha establecido una amplia gama de afectaciones directas, como daños a la infraestructura, impacto en fuentes hídricas, cambios en el paisaje natural, emisión de contaminantes, interrupción de actividades tradicionales, y afectación de la movilidad y la seguridad de las comunidades. Estas afectaciones pueden implicar desde la degradación del medio ambiente hasta la alteración de la vida cotidiana y cultural de las comunidades étnicas... (página 30 de la sentencia del 9 de febrero de 2026)*

*"(...) Es así entonces que no es de recibo que la empresa Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. no haya realizado los trámites pertinentes a fin de informar al Ministerio del Interior la existencia de este Consejo Comunitario (COCOMAUNGUIA) y es entonces dado concluir que faltó al deber de diligencia de identificar y reconocer a los Consejos Comunitarios que se están viendo afectados por el proyecto Puerto Antioquia, se ha omitido la valoración del impacto que el proyecto puede generar tanto en la comunidad como en las tierras, territorios, y recursos naturales y la omisión del deber de consulta a la comunidades que se están viendo directamente afectadas dan lugar a la violación al derecho fundamental de consulta previa... (página 32 de la sentencia del 9 de febrero de 2026).*

*"(...) Frente a las actuaciones realizadas por el Mininterior – DANCP, en el momento en que logró determinar la existencia de comunidades étnicas que pueden ser afectadas por la vulneración de sus derechos colectivos, culturales y sociales, debido a la ejecución de proyectos, obras o actividades del Estado debía dar inicio al proceso de consulta previa, pues la entidad cuenta con las capacidades y los medios para hacerse acreedora de la información correspondiente con el fin de determinar si las comunidades accionantes resultaría afectadas por el proyecto, y de esta manera garantizar el derecho a la participación. El Despacho no desconoce los esfuerzos por parte del Mininterior de recolectar información por medio de reuniones realizadas con las comunidades, sin embargo, si se cuestiona la celeridad en la toma de decisiones, pues tal como lo estima la Corte Constitucional, si en gracia de discusión se admitiera que existe duda en relación con la afectación directa del proyecto respecto de la comunidad accionante, lo cierto es que la propia*





*jurisprudencia señala que dicha duda "deberá resolverse exigiendo la realización de la consulta previa"... (página 32 de la sentencia del 9 de febrero de 2026).*

*"(...) La consulta previa en Colombia no es un trámite opcional o divisible, sino un proceso secuencial y técnico obligatorio para el Estado cuando una medida o proyecto afecta directamente a comunidades étnicas, garantizando el debido proceso y la protección real de sus derechos, como lo establecen normas (Decreto 2353/2019) y jurisprudencia constitucional (Sentencias SU 123/2018, T-041/2016, SU217/2017) ... (páginas 33 y 34 de la sentencia del 9 de febrero de 2026).(...)"*

Es decir, el despacho considera que el derecho a la consulta previa debe decretarse por la presencia de la comunidad étnica en la zona donde se está ejecutando el proyecto **Puerto Antioquia**, manifiesta expresamente que, al parecer los megaproyectos por su naturaleza misma, afectan directamente a las comunidades étnicas, insiste en que, esta Dirección al momento que logro determinar la existencia de comunidades étnicas que pueden ser afectadas por la vulneración de sus derechos colectivos, culturales y sociales, debido a la ejecución de proyectos, obras o actividades debía dar inicio al proceso de consulta previa, finaliza diciendo que la consulta previa no es un trámite opcional o divisible, sino un proceso secuencial y técnico obligatorio para el Estado.

El Despacho a-quo, fija su decisión en primera ocasión, en un aspecto que fue abolido con la Directiva Presidencial N°. 8 de 2020<sup>[15]</sup> y desconoce la posición jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional en la jurisprudencia constitucional de la Sala Plena, específicamente en la sentencia SU-123 de 2018<sup>[16]</sup>, la cual determinó que "el criterio adecuado e indispensable para establecer la aplicación de la consulta previa es el de afectación directa.", puesto que, en el funcionario de conocimiento, apoya su decisión en apreciaciones subjetivas insistiendo en la existencia de la comunidad étnica, lo cual no está en duda y no utiliza el criterio adecuado e indispensable para determinar la procedencia de la consulta previa.

Adicional a ello, manifiesta expresamente que, a su parecer, los megaproyectos por su naturaleza como tal, afectan a las comunidades étnicas, dejando atrás la posición de la Honorable Corte Constitucional en materia de consulta previa, donde manifiesta ampliamente que, el criterio que debe tenerse en cuenta es la afectación directa, indistintamente que el proyecto sea pequeño o sea grande,



en cualquiera de los casos debe realizarse un análisis técnico y jurídico para determinar si existe o no una posible afectación directa y poder así, proceder a determinar o no la consulta previa con una comunidad étnica, trámite que en Colombia está asignado única y exclusivamente a esta autoridad del Ministerio del Interior.

Ahora bien, aunque se haya decretado la nulidad de todo lo actuado por parte del superior jerárquico del a-quo, en la sentencia del 9 de febrero de 2026, no se pueden obviar la puesta en marcha de una serie de acciones técnicas, administrativas y de coordinación interinstitucional que fueron adelantadas en el marco del cumplimiento de la sentencia N. 226 del 28 de noviembre de 2025 proferida por su despacho en este mismo trámite de tutela, y que fueron informadas a su despacho mediante el **Oficio radicado 2025-2-002400-060157 Id 677737 del 18 de diciembre de 2025**, relacionado en el presente informe, en el acápite **I ANTECEDENTES PROCESALES numeral 1.2.**, acciones encaminadas a determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para el proyecto **“Puerto Antioquia”**, respecto al **Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato**, donde se tenía previsto, una visita de verificación en campo para el mes de diciembre de 2025, y por la no disposición de la empresa ni de la comunidad étnica, se había reprogramado para este principio de año, trámite que en este momento no se podrá seguir adelantando, ya que el a-quo ordeno adelantar el proceso de consulta previa de manera directa, sin haberse culminado por parte de esta autoridad, el respectivo trámite de determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa.

Valga la pena mencionar que el a quo, aunque reconoce a esta Dirección como la encargada de determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, de la siguiente manera:

*“(…) Es claro que el juez de tutela no debe asumir funciones técnicas o administrativas como ordenar etapas posteriores de una consulta previa antes de que una autoridad administrativa que para el caso es el Ministerio del Interior y esa entidad gubernamental quien determine su procedencia mediante un acto formal con respeto a la legalidad administrativa y la separación de poderes evitando que el juez adelante fases que corresponden a la entidad competente, lo cual podría viciar el proceso.*

*Ahora bien, es clave tener respecto a la consulta previa que no es un proceso discrecional, pues la autoridad administrativa debe surtirla de manera*

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCO FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



*obligatoria si hay afectación directa, obedeciendo a un proceso reglado técnico y secuencial, que no puede fraccionarse ni confundirse con audiencias ambientales o reuniones informativas... (página 34 de la sentencia del 9 de febrero de 2026). (...)"*

Insiste en abrogarse una facultad funcional que no le corresponde y se sale del marco de sus funciones jurisdiccionales contempladas en la Ley 270 de 1996[17] Estatutaria de Administración de Justicia, para conceptuar sobre algo que desconoce al no corresponder a su campo funcional, usurpando funciones que Legalmente le han sido asignadas a la Dirección Nacional de Consulta Previa de este Ministerio, como única autoridad en Colombia para conceptuar sobre la procedencia o no de la consulta previa.

En conclusión, es claro que el juzgado de primera instancia en ningún momento realizó análisis técnico de la afectación directa en el presente tramite constitucional y simplemente ordena un proceso consultivo por la mera existencia de la comunidad étnica en donde se están realizando las actividades del proyecto "Puerto Antioquia", por lo cual, es claro que se apartó del precedente judicial en la materia, sin sustentar la determinación de apartarse de ese antecedente jurisprudencial y sin sustentar en debida manera la afectación directa que la comunidad pueda llegar a sufrir, esto de conformidad con lo establecido en los criterios establecidos por la sentencia SU-123 de 2018[18], actuación que se convierte en una vía de hecho que afecta su determinación.

Adicional a lo anterior y como ya se mencionó, el a-quo ordena a esta autoridad que *determine los impactos ambientales, culturales, económicos y sociales que el proyecto "Puerto Antioquia" ha ocasionado sobre el colectivo étnico*, cuando estas no son competencias otorgadas a esta autoridad del Ministerio del Interior, la identificación de impactos y medidas de manejo, hacen parte de la cuarta etapa del proceso consultivo, en esta fase del proceso de consulta previa se da un dialogo entre las partes (comunidad y ejecutor) dirigida y coordinada por esta autoridad, siendo esta nuestra única competencia, finalmente las partes llegan a unos acuerdos que deben ser protocolizados y debidamente establecidos en acta suscrita por las partes, en la misma se nombra un comité de seguimiento de los acuerdos protocolizados, los cuales son obligación para las partes.



En consecuencia, esta impugnación no busca desconocer la protección constitucional concedida, sino ajustar el alcance de las órdenes impartidas al marco competencial y procedimental, en aras de garantizar su correcta y eficaz ejecución.

## **2.2. Falta de prueba sumaria suficiente para tener por acreditada la afectación directa.**

El fallo impugnado da por establecida una incidencia directa y verificable del proyecto "Puerto Antioquia" sobre la comunidad accionante, pese a que el núcleo del debate es si existe una posible afectación directa del proyecto sobre la comunidad étnica, si bien en sede de tutela puede flexibilizarse la actividad probatoria, ello no autoriza a reemplazar el estándar mínimo de acreditación sumaria de los hechos constitutivos de la vulneración, ni a convertir una controversia técnica en una certeza judicial suficiente para imponer órdenes estructurales de alta complejidad. La tutela no elimina la carga mínima de demostrar así sea sumariamente el presupuesto central del amparo, la existencia de una afectación directa, actual o inminente, atribuible a las entidades o particulares accionados.

En este caso, la sentencia parte de una inferencia ("*existen indicios serios*", "*puede inferirse razonablemente*") pero no identifica de manera verificable los soportes técnicos que permitirían tener por acreditado una afectación directa a la comunidad étnica accionante. En particular, el fallo no precisa:

- Qué cartografía tomó como referencia (fuente oficial, fecha, escala, metadatos, entidad productora).
- Qué polígonos comparó y cuáles fueron las capas utilizadas (límites oficiales de resguardos, perímetro del proyecto, áreas del proyecto).
- Cuál sistema de coordenadas se empleó y si hubo estandarización previa.
- Cuál fue la metodología a implementar para determinar la afectación directa.
- Cuál es el documento técnico (mapa, reporte geoespacial, archivo o anexo) que permita replicar el resultado y verificarlo.

Aun cuando el accionante refiere una existencia o coincidencia con el proyecto "Puerto Antioquia" que puede causar afectaciones a la comunidad étnica que



representa, la providencia no explica con claridad, como el proyecto puede afectar a la comunidad accionante, ni si son consistentes con fuentes oficiales o con un cruce técnico independiente, en otras palabras, el fallo no construye el puente probatorio entre la afirmación de la comunidad étnica y la conclusión jurídica de “afectación directa”, y en ese vacío probatorio impone consecuencias intensas.

Esto es relevante porque, conforme a los estándares constitucionales, la consulta previa procede cuando existe una evidencia razonable de afectación directa, pero incluso ese umbral requiere al menos un soporte mínimo identificable y contrastable. Cuando el hecho generador de la obligación “la afectación directa” depende de un fenómeno geoespacial discutido (existencia de la comunidad étnica), el estándar mínimo de prueba sumaria exige insumos técnicos rastreables (cartografía oficial, coordenadas, mapas georreferenciados o certificaciones técnicas), no meras afirmaciones o referencias genéricas sin especificación.

Más aún, la insuficiencia probatoria se agrava porque el fallo no se limita a disponer una actuación preliminar de verificación, sino que ordena adelantar un proceso consultivo en un plazo perentorio y adopta restricciones relevantes, decisiones que exigen un juicio especialmente cuidadoso de certeza mínima, proporcionalidad y delimitación territorial. En términos prácticos, la sentencia transforma una discusión técnica que requiere verificación especializada en un supuesto fáctico definitivamente establecido, lo cual configura una valoración probatoria irrazonable y una motivación aparente en un punto determinante del caso.

### **2.3. Efectos de la nulidad declarada y contradicción en la en la base de la orden principal.**

El fallo impugnado no articula sus órdenes con un hecho procesal decisivo que obra en el expediente, el 27 de enero del 2026, en sede de impugnación y dentro del proceso de la referencia, el Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil – Familia, se dispuso a DECRETAR LA NULIDAD de lo procesado desde del auto que admitió el trámite esta acción de tutela, con el propósito expreso de rehacer la actuación desde la notificación de las partes, en garantía del derecho de defensa y del debido proceso.

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOO FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



El 28 de enero de 2026, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbo, Antioquia, profirió el Auto Interlocutorio N° 051, atendiendo la orden del Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil – Familia en sede de impugnación, y notifico nuevamente a las partes para que respondieran en debida forma, la acción constitucional referida.

Esta nulidad no puede entenderse como una incidencia menor o meramente formal, supone que las actuaciones surtidas dentro del segmento afectado, incluidas providencias, notificaciones y comunicaciones derivadas de la admisión, quedaron comprometidas por un vicio que obliga a reconstruir el trámite con plena regularidad, asegurando notificación efectiva y posibilidad real de contradicción. Por ello, al proferir decisión de fondo, el juez debe precisar de manera clara qué actuaciones se entienden saneadas, cuáles se reiteran y, sobre todo, sobre qué hitos procesales válidos se soportan las órdenes impartidas.

No obstante, la sentencia impugnada sustenta su mandato central (numeral SEGUNDO) en una premisa que no resulta compatible con ese escenario, ordena "*DAR INICIO AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA*" como si ese "*inicio*" fuera un punto de partida firme, estable y exento de discusión. El inconveniente es evidente, la sentencia del 28 de noviembre de 2025 se ubica dentro del tramo temporal impactado por la nulidad (19/11/2025 en adelante) y, por ende, no puede asumirse sin más, como soporte incuestionable de una obligación estructural, perentoria y con efectos frente a varios sujetos.

Esta falta de armonización se traduce en un defecto autónomo de debido proceso, por dos razones:

**(i) Incongruencia interna y motivación insuficiente sobre el alcance real de la nulidad.**

Aunque el fallo da cuenta de que el trámite debió rehacerse, no explica cómo se depura el efecto jurídico de la nulidad respecto del supuesto "*inicio*" del proceso consultivo. No se precisa, por ejemplo, si la determinación de la procedencia de la consulta previa ordenada en sentencia del 28 de noviembre de 2025, fue reiterada en la actuación saneada, si se restablecieron plenamente las





condiciones de contradicción o si el “inicio de la consulta previa ordenado” al que alude la sentencia objeto de impugnación, se deriva de una decisión válida adoptada luego de rehacer el trámite. Al omitirse esa conexión, la providencia mantiene como presupuesto determinante un hito procesal cuya estabilidad fue afectada, generando una evidente ruptura de coherencia entre antecedentes y órdenes.

**(ii) Imposibilidad jurídica parcial del numeral SEGUNDO, al apoyarse en un presupuesto procesal inestable.**

Ordenar “iniciar un proceso de consulta previa” donde ya se había ordenado iniciar un trámite Determinación de la Procedencia de la Consulta Previa, en un segmento que debió rehacerse implica imponer una obligación de resultado sobre una base procesal no depurada. En la práctica, se coloca a la autoridad administrativa “DCP del Ministerio del Interior” ante la exigencia de cumplir una orden anclada en un “inicio de un proceso consultivo” discutible, con el riesgo de que ello derive en controversias posteriores de validez, lo cual resulta incompatible con los estándares mínimos de seguridad jurídica que deben orientar órdenes de tutela de alto impacto.

En suma, la nulidad exigía que, si el fallo pretendía tener la lógica de un “inicio de un proceso de consulta previa”, reconstruyera de manera expresa ese punto de partida dentro del trámite saneado (con notificación regular, traslado efectivo y delimitación clara del alcance), y solo a partir de allí dispusiera mandatos compatibles con el debido proceso. Al no hacerlo, el numeral SEGUNDO queda soportado en una premisa procesal insuficientemente depurada, lo que impone su revocatoria o, cuando menos, su modificación.

**2.4. Actuaciones adelantadas para el cumplimiento de la sentencia n. 226 del 28 de noviembre de 2025 realizadas por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que no se tuvo en cuenta a la hora de proferir la sentencia del 9 de febrero de 2026.**

Una vez notificada formalmente la sentencia del 28 de noviembre de 2025, al Ministerio del Interior, esta Dirección procedió a **remitir, de manera**



**inmediata, el fallo a la Subdirección Técnica de Consulta Previa**, área encargada de determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, a efectos de activar sin dilación dicho análisis, atendiendo el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas impartido por el despacho judicial para dar inicio al cumplimiento de la orden. Esta actuación inicial permitió la puesta en marcha de una serie de acciones técnicas, administrativas y de coordinación interinstitucional que constituyen el punto de partida para la ejecución progresiva de la orden judicial, de conformidad con la naturaleza compleja del procedimiento de consulta previa regulado por el Decreto 2353 de 2019[19].

A continuación, se describen, de manera cronológica, amplia y detallada, las actuaciones adelantadas:

**- Elaboración de concepto técnico y determinación de la necesidad de realizar visita de verificación (2 de diciembre de 2025).**

Para dar cumplimiento al numeral segundo del fallo — referido a adelantar el análisis de determinación de procedencia de la consulta previa — la Subdirección Técnica elaboró un concepto técnico especializado, producto del examen cuidadoso de los insumos cartográficos, geográficos y espaciales aportados, así como del análisis del área de influencia del proyecto respecto de las dinámicas territoriales y socioculturales del Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato (COCOMAUNGUIA).

Este documento técnico incorporó los criterios jurisprudenciales establecidos por la **Sentencia SU-123 de 2018**, las orientaciones metodológicas definidas en la **Directiva Presidencial 08 de 2020**, y los parámetros del **método de afectación directa**, concluyendo que la información disponible exigía la realización de una **visita de verificación en territorio** para establecer, con mayor rigor técnico, si las actividades del proyecto “Puerto Antioquia” tienen la capacidad de generar afectación directa al colectivo étnico.

Dicha conclusión técnica, incorporada de forma expresa en el oficio con radicado **2025-2-002410-055752 Id. 667306**, se consignó en los siguientes términos:

*"Se requiere realizar visita de verificación al Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato con el fin de establecer si las actividades del proyecto tienen la capacidad*



*de afectarlo directamente, conforme a los criterios establecidos en la SU-123 de 2018 y la Directiva Presidencial 08 de 2020.”*

Este concepto constituye el acto técnico inicial indispensable para continuar con el trámite de determinación de procedencia de la consulta previa, dado que provee el sustento metodológico y la motivación técnica que exige el procedimiento administrativo para garantizar decisiones fundadas y respetuosas del debido proceso.

### **Comunicación oficial a la empresa ejecutora y convocatoria a reunión preparatoria (3 de diciembre de 2025).**

En cumplimiento del deber de articulación interinstitucional y con fundamento en el mandato judicial de actuar con base en la información técnica suministrada por el ejecutor, la DCP remitió el **Oficio con radicado 2025-2-002410-055752 Id. 667306** al Gerente Social de PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A.

En dicha comunicación oficial se informó:

- La decisión de realizar visita de verificación a COCOMAUNGUIA.
- Los fundamentos técnicos y jurídicos que justifican la visita.
- La convocatoria a una reunión preparatoria para revisar aspectos metodológicos, técnicos y logísticos.
- La fecha propuesta del 4 de diciembre de 2025 a las 2:00 p.m.

El oficio incluye una exposición técnica robusta, imágenes cartográficas que contextualizan la evaluación preliminar del proyecto, y la identificación del equipo profesional responsable. Esta actuación permitió avanzar simultáneamente en los numerales segundo y tercero del fallo, toda vez que activa el procedimiento técnico-administrativo y crea condiciones efectivas para la evaluación de posibles impactos.

### **Comunicación oficial a la autoridad del Consejo Comunitario COCOMAUNGUIA (3 de diciembre de 2025)**

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOU FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



En la misma fecha, esta Autoridad expidió el **Oficio Radicado 2025-2-002410055785 Id. 667408 (Anexo 7)**, mediante el cual:

- Se informó formalmente al Consejo Comunitario la decisión de realizar la visita de verificación.
- Se explicaron, de manera precisa, las etapas metodológicas de la visita: presentación del proyecto por la empresa, cartografía social, entrevista colectiva, y recorrido territorial.

Asimismo, se solicitó información indispensable para la programación logística y se consultó, expresamente, la disponibilidad del colectivo para que la visita se realizará después **del 15 de enero de 2026**, atendiendo los requerimientos de participación efectiva, disponibilidad comunitaria y respetando sus prácticas organizativas internas.

Esta actuación garantiza la interculturalidad y el principio de participación real y efectiva, y se alinea con el numeral tercero de la sentencia que exige generar mecanismos de diálogo permanente durante el proceso.

**- Respuesta de la empresa ejecutora confirmando su plena disposición y aceptación de las fechas propuestas (3 de diciembre de 2025)**

La empresa PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A. remitió comunicación formal —visible en el documento con referencia CG-00152 (**Anexo 8**)— en la que:

- Confirmó su disposición logística y técnica para la realización de la visita.
- Manifestó su voluntad de acogerse a las fechas sugeridas por la comunidad y por la DCP.
- Aceptó, de manera expresa, que la visita se programe después del 15 de enero de 2026.
- Ratificó su compromiso de coordinar con la DCP y con la autoridad étnica.

Esta respuesta confirma que la coordinación interinstitucional está plenamente activada y que las condiciones logísticas están siendo garantizadas, conforme a



lo ordenado judicialmente. En tal medida, constituye un avance significativo para el cumplimiento del fallo, al asegurar que todas las partes involucradas se encuentran articuladas y en disposición de facilitar el proceso.

**- Convocatoria y desarrollo de reunión técnica preparatoria (4 de diciembre de 2025)**

En cumplimiento de la convocatoria realizada, la DCP programó la **reunión virtual del 4 de diciembre de 2025 a las 2:00 p.m.**, cuyo propósito fue:

- Revisar los aspectos técnicos y metodológicos de la visita. Aclarar dudas del ejecutor sobre la información requerida.
- Coordinar la presencia de los profesionales que integrarán la comisión técnica.
- Avanzar en la definición preliminar de fechas posteriores al 15 de enero de 2026, de común acuerdo entre las partes.

Esta actuación se encuentra documentada y deriva directamente de la obligación impartida por el despacho, en cuanto a "crear mecanismos que garanticen el diálogo permanente con el Consejo Comunitario mientras el proceso se encuentra en ejecución".

**- Activación interna del trámite de determinación de procedencia de la consulta previa.**

Paralelo a las actuaciones externas descritas, la Subdirección Técnica activó formalmente las labores internas propias del procedimiento de determinación de procedencia, entre ellas:

- La verificación preliminar de la información técnica entregada por el ejecutor.
- La revisión de bases de datos institucionales y geográficas.
- La programación preliminar de la comisión de visita en territorio.
- La incorporación de la solicitud dentro del Plan de Comisiones 2026.

La información relacionada en el presente acápite, fue aportada con sus respectivos anexos en informe de cumplimiento de la sentencia N. 226 del 28 de noviembre de 2025, allegado a su despacho mediante el **Oficio radicado 2025-**

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCO FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



**2-002400-060157 Id 677737 del 18 de diciembre de 2025**, el cual con sus anexos hace parte del expediente digital y que a su vez fue puesto en conocimiento del Honorable Tribunal Superior de Antioquia por el juzgado de conocimiento, lo anterior consta en la notificación del oficio mencionado, la cual se adjunta al presente informe como el anexo número 5.

Estas actuaciones descritas, constituyen el componente técnico indispensable para avanzar, de manera seria, rigurosa y progresiva en el cumplimiento del fallo judicial del 28 de noviembre de 2025, sin embargo, el despacho del a-quo no tuvo en cuenta toda esta información y puesta en marcha de un sinnúmero de actuaciones administrativas que se activaron por el mandato judicial impartido, que incluso, al no tener en cuenta dichas actuaciones, se puede estar haciendo incurrir a la administración en un detrimento patrimonial, el cual se puede subsanar simplemente con una orden adecuada, es decir, que esta entidad active lo de sus competencias y culmine la primera etapa del proceso consultivo, de Determinación de la procedencia y la Oportunidad de la Consulta Previa que como ya se informó, se venía adelantando en debida forma.

O en su defecto, que aborde de manera sustancial, por qué cambia una orden judicial, en el sentido de ordenar realizar un proceso consultivo inmediatamente, cuando la orden impartida en sentencia del 28 de noviembre de 2025 fue, que se determinara la procedencia de la consulta previa, como en efecto debería ser, se recuerda que la declaratoria de nulidad del superior jerárquico no buscaba cambiar el fallo judicial, ni eso fue lo ordenado, sino que recomponga la actuación con la debida notificación de todas las entidades vinculadas en esa misma providencia para la debida integración del contradictorio, en efecto así fue, sin embargo el a-quo no menciona cuales fueron esas nuevas pruebas o consideraciones que tuvo en cuenta, al momento de cambiar sustancialmente el fallo judicial del 9 de febrero de 2026, respecto al fallo judicial del 28 de noviembre de 2025.

### **III. PETICIONES**

En atención a los argumentos de defensa puestos en conocimiento de su Despacho, se solicita respetuosamente al despacho, lo siguiente:



Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOO FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



**PRIMERO:** Se sirva conceder la impugnación del presente fallo, a fin de ser remitido al superior jerárquico, conforme a los fundamentos procesales establecidos.

**SEGUNDO: NO TUTELAR** LOS DERECHOS ALEGADOS por el accionante, en cuanto no se ha vulnerado ningún derecho fundamental por parte de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, como quedó demostrado en el presente escrito. Máxime, cuando no demuestra de ninguna manera la presunta afectación.

**TERCERO: DECLARAR** improcedente la tutela en contra de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, por ausencia de vulneración alguna de derechos fundamentales señalados por el accionante.

**CUARTO:** Subsidiariamente, de no proceder ninguna de nuestras solicitudes, solicito se ordene la modificación o modulación de la orden segunda y tercera de la providencia del 9 de febrero de 2026, en el sentido de ordenar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, agotar su competencia y pronunciarse acerca de la procedencia y oportunidad de la Consulta Previa en el caso concreto.

#### **IV. ANEXOS**

Se anexa la siguiente información:

1. Decreto 0714 de 2024 *"Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"* (13 folios).
2. Resolución No. 1289 del 02 de septiembre de 2025 *"Por la cual se efectúa el nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio del Interior y se termina un encargo"* (2 folios).
3. Oficio con radicado 2025-2- 002400.053181 Id 655478 del 21 de noviembre de 2025 y constancia de envío.

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOO FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



4. Sentencia de primera instancia No.266 del 28 de noviembre de 2025 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Turbo – Antioquia.
5. Oficio radicado 2025-2-002400-060157 Id 677737 del 18 de diciembre de 2025 y constancia de envío.
6. Oficio radicado 2026-2-001404-002258 Id 700598 del 03 de febrero de 2026 y constancia de envío.
7. Oficio Radicado 2025-2-002410055785 Id. 667408
8. Comunicación formal documento con referencia CG-00152

## V. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones, se recibirán en la Oficina de Correspondencia ubicada en la calle 12 B No. 8-46 de la ciudad de Bogotá D.C., o al buzón electrónico previsto para ello en los términos del artículo 197 de la Ley 1437 de 2011 [notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co)

<b>ASUNTO:</b>	IMPUGNACIÓN FALLO DE TUTELA DEL 9 DE FEBRERO DE 2026.
<b>RADICADO:</b>	058373184001 <b>2025 00442</b> 00
<b>ACCIONANTE:</b>	RAFAEL CUESTA PALACIOS
<b>ACCIONADOS:</b>	PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A., MINISTERIO DEL INTERIOR- DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA.
<b>VINCULADOS:</b>	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ (CORPOURABÁ), AGENCIA NACIONAL DEL LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA), AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), ALCALDÍA DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA.

Cordialmente,

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOU FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



  
**JUAN GABRIEL DURAN SANCHEZ**  
**Director Técnico**  
Dirección Jurídica  
Despacho del Ministro

**Elaboró:** Elaboró: Jose Doria Cano, Abogado contratista del Área Jurídica de la DCP.  
**Revisó:** Rafael Camilo Álvarez, Abogado Contratista Grupo de Gestión de Acciones de Tutela- DIJ.  
**Aprobó:** Yesica Escobar Pardo, Abogada Contratista Grupo de Gestión de Acciones de Tutela- DIJ.

[1] Resolución No. 1289 del 02 de septiembre de 2025 "Por la cual se efectúa el nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio del Interior y se termina un encargo".

[2] Decreto 0714 de 2024 "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior". Consultado el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/decreto-0714-de-2024.pdf>

[3] Constitución Política de la República de Colombia 1991. Consultado el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

[4] Decreto 2591 de 1991. "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 40165. 19, NOVIEMBRE, 1991. PÁG. 1 Consultada el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5304>

[5] Decreto 2353 de 2019. "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan las funciones de algunas dependencias". Consultado el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104632>

[6] Ibidem

[7] Decreto Ley 2893 de 2011 "Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior". Presidencia de la República. 11, agosto, 2011 Pág.1. Consultado el 10 de febrero de 2026, en: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto\\_2893\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2893_2011.html)

[8] Directiva Presidencial 10 de 2013 "Guía para la realización de consulta previa". DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIX.N.48967.7, NOVIEMBRE, 2013. PÁG.1. Consultada el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=DirectivasP/30021326>

Al contestar cite Radicado 2026-2-001404-003695 Id: 707161  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 01 PROMISCOU FAMILIA  
CIRCUITO - ANTIOQUIA - TURBO  
Fecha: 16-02-2026 15:05:31  
Folios: 29  
Anexos: 9 Documentos electrónicos



[9] Corte Constitucional. Sentencia SU 123 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes. Consultada el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/su123-18.htm>

[10] Decreto 2353 de 2019. “*Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan las funciones de algunas dependencias*”. Consultado el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104632>

[11] Directiva Presidencial 10 de 2013 “*Guía para la realización de consulta previa*”. DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIX.N.48967.7, NOVIEMBRE, 2013. PÁG.1. Consultada el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=DirectivasP/30021326>

[12] Directiva Presidencial No. 8 de 2020, “*Estableció la guía procedimental para la realización de la consulta previa con comunidades indígenas*”. Consultada el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=141807>

[13] Corte Constitucional. Sentencia SU 123 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes. Consultada el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/su123-18.htm>

[14] Ibidem

[15] Directiva Presidencial No. 8 de 2020, “*Estableció la guía procedimental para la realización de la consulta previa con comunidades indígenas*”. Consultada el 10 de febrero de 2026 en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=141807>

[16] Corte Constitucional. Sentencia SU 123 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes. Consultada el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/su123-18.htm>

[17] Ley 270 de 1996 “*Estatutaria de la Administración de Justicia*”. Consultada el 10 de febrero de 2026, disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6548>

[18] Corte Constitucional. Sentencia SU 123 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes. Consultada el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/su123-18.htm>

[19] Decreto 2353 de 2019. Consultado el 10 de febrero de 2026, en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104632>